

El gasto en defensa y las prioridades sociales en América Latina

Un homenaje a Juan Bautista Alberdi en el año del bicentenario de su natalicio

Por Gabriel C. Salvia

*“Las armas de la idea son la lógica, la observación,
la expresión elocuente, no la espada”.*

Juan Bautista Alberdi

El presidente del Perú, Alan García, propuso la limitación de la compra de armas para atender necesidades sociales urgentes al inaugurar la 40 Asamblea General de la OEA, realizada en Lima entre el 6 y 8 de junio de 2010, bajo el lema “Paz, Seguridad y Cooperación en las Américas”. Así, con el objetivo de instalar el debate para hacer de América Latina “una zona de paz verdadera, y no de paz por equilibrio de armas” y utilizar dichos recursos en programas sociales, Alan García advirtió que desde que se creó la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) la región en su conjunto ha comprado 25 mil millones de dólares en armas nuevas y se prepara a adquirir en los próximos 5 años, 35 mil millones más. Con cifras muy elocuentes García planteó: “Es esto lo que me preocupa, por una razón elemental, pues con esos 35 mil millones podríamos darle a 10 millones de familias de América, que suman unas 50 millones de personas, agua potable, electricidad, educación y salud integral por los próximos 20 años”. El debate que propone Alan García lo debe trascender y llamar a la reflexión, especialmente a aquellos líderes democráticos supuestamente embanderados en las causas progresistas. Es que la verdadera preocupación por los más pobres y la tan declamada redistribución del ingreso debe darse en los debates presupuestarios, estableciendo las prioridades del gasto en base a los recursos con los cuales cuenta un estado. Por ende, el debate sobre el gasto militar debe alcanzar a más países, inclusive a aquellos que no tienen grandes recursos para tal fin.

Gabriel C. Salvia es periodista y activista de Derechos Humanos. Desde su fundación, es Director General del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), integra el Consejo Editorial de *Perspectiva: Revista Latinoamericana de Economía, Política y Sociedad*, y realiza colaboraciones periodísticas para varios medios de la Argentina y América Latina. Compiló el libro “*La experiencia chilena: consensos para el desarrollo*” (CADAL, 2005); y es el autor del capítulo “El difícil papel de Latinoamérica en la transición de Cuba a la Democracia” publicado en el libro “*Escenarios de transición en Cuba*” (Konrad Adenauer Stiftung, México, 2008).



De acuerdo a datos que brinda el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI), en Latinoamérica se registró en los últimos años un incremento del 36% en el gasto militar. Pero salvo por la Venezuela autoritaria gobernada por el militar-paracaidista Hugo Chávez Frías, América Latina es una región en la cual no existen hipótesis reales de conflicto armado entre sus países.

En consecuencia, dado el alto grado de pobreza entre los habitantes de Latinoamérica, tiene bastante lógica la iniciativa que viene impulsando el presidente del Perú, Alan García, proponiendo la limitación de la compra de armas para atender necesidades sociales urgentes. Y precisamente, ese fue el tema que planteó el presidente peruano al inaugurar la 40 Asamblea General de la OEA, realizada en Lima entre el 6 y 8 de junio de 2010, bajo el lema "Paz, Seguridad y Cooperación en las Américas". Hábilmente, García formuló los siguientes interrogantes: "¿Dónde está la hipótesis de guerra que estamos manejando para terminar beneficiando a unas cuantas fábricas de armas en el mundo?" "¿Qué es lo que compro y para qué lo compro?" Y haciendo referencia al discurso inicial del chileno José Miguel Insulza, expresó: "Nuestro secretario general acaba de recordarnos que somos la región más pacífica en este siglo y entonces: ¿para qué hemos comprado tantas armas? ¡Lindamos en el camino de la irracionalidad!".

Así, con el objetivo de instalar el debate para hacer de América Latina "una zona de paz verdadera, y no de paz por equilibrio de armas" y utilizar dichos recursos en programas sociales, Alan García advirtió que desde que se creó la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) la región en su conjunto ha comprado 25 mil millones de dólares en armas nuevas y se prepara a adquirir en los próximos 5 años, 35 mil millones más. Con cifras muy elocuentes García planteó: "Es esto lo que me preocupa, por una razón elemental, pues con esos 35 mil millones podríamos darle a 10 millones de familias de América, que suman unas 50 millones de personas, agua potable, electricidad, educación y salud integral por los próximos 20 años. Con solo un avión de guerra se podrían adquirir 30 aceleradores lineales para salvar de la muerte a miles de personas con cáncer o adquirir herramientas, como tractores, para el desarrollo interno".

También agregó que desde que se iniciaron las sesiones anuales de la OEA, hace 40 años, se han gastado hasta la fecha 100 mil millones de dólares en armas, que pudieron haber tenido otro destino a favor de los pueblos. Por eso, manifestó lo siguiente: "Todas, o casi todas, son hoy chatarra, acero en desuso. ¿De qué le sirvió al pueblo? ¿De qué le sirvieron las hipótesis de guerra, conflicto y enfrentamiento? Ni siquiera hemos usado el

5 por ciento de esas armas en los conflictos que hemos tenido. Cuánta gente ha muerto sin educación, sin alfabeto, sin vacunas por esta carrera insensata de ver enemigos donde de hecho no los hay".

Las reacciones de los Cancilleres

Frente al planteo de Alan García y el tema elegido para la Asamblea General de la OEA, varios Ministros de Relaciones Exteriores mostraron su acuerdo con el Presidente del Perú. Inclusive, el canciller de Chile, Alfredo Moreno Charme, quien afirmó: "El presidente Alan García lo ha explicado y creo que el objetivo de todas las sociedades es poder dedicar la mayor cantidad de recursos al desafío social, que es tan grande". Esto es importante teniendo en cuenta un diferendo limítrofe existente entre el Perú y Chile, junto al hecho que el país hoy gobernado por Sebastián Piñera asigna importantes cantidades de recursos a las Fuerzas Armadas como porcentaje de las ventas del cobre, una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. Por eso, Moreno expresó lo siguiente: "Que todos hablemos de la misma manera para que los números signifiquen lo mismo...creemos que es un primer paso para tener más confianza mutua y que eso signifique tener un menor nivel de armamento de todos los países en el mediano plazo".

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, también respaldó la propuesta del Presidente de Perú, Alan García Pérez, de reducir los gastos militares en la región, y remarcó que es indispensable avanzar en esa medida para mejorar la convivencia y el desarrollo de los países: "Las palabras del presidente García se enmarcan en una decisión valiente de enfrentar e impulsar un proceso de paz, de disminución de los gastos militares de nuestro continente, que es indispensable para mejorar el entorno de convivencia en nuestros países en condiciones de paz". Destacó que ello permitirá "tener recursos liberados para el financiamiento de los proyectos y programas sociales y de desarrollo económico". El apoyo de Ecuador a la iniciativa es muy importante, pues ambos países vivieron un conflicto armado en los noventa.

Por su parte, el entonces canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, también expresó su acuerdo con la propuesta peruana de reducir y homologar el gasto en compra de armamento en la región, durante la sesión plenaria de la 40ª Asamblea General de la OEA: "Qué importante es avanzar en la homologación de gastos militares, y qué importante además es concretar de una vez los mecanismos de no proliferación y eliminación de armas nucleares, los programas de desminado, e incluso la eliminación de municiones racimo". Asimismo, Bermúdez destacó las observaciones hechas por Alan García: "Él fue muy explícito en cuanto a las

consideraciones frente a armas versus política social; esa es una reflexión de fondo”.

Otra opinión relevante fue la de René Castro, el Canciller de Costa Rica: “Tenemos 60 años sin Ejército, y ya pasamos la prueba de conflictos fronterizos, de discusiones internas, de terremotos, y sabemos que ahorrarse el dinero del gasto militar es lo que permite tener una inversión extra en educación y en salud”. Y agregó: “Eso ha permitido que nuestro país terminara de alfabetizar a su población, y de generar programas de salud que nos tienen con indicadores de país desarrollado sin serlo”.

El Canciller tico mencionó cifras de América Latina, donde la compra de armas, los gastos de capital de una institución castrense, y el mantenimiento de personal militar cuestan entre el 3 y 6 por ciento del PBI de una nación: “Eso es igual al total del gasto que hace nuestro país en universidades públicas, y pensamos que es un crimen desperdiciar dinero en la compra de armas”.

Finalmente, el canciller de República Dominicana, Carlos Morales Troncoso, señaló que “América Latina tiene un gran reto, no solamente en la educación, sino también en el tema de la vivienda, la salud de la población, los niveles de educación, y otros más en el sector social”. Por ello, recomendó: “En vez de ir hacia el armamentismo, creo que deberíamos focalizar nuestras inversiones en el aspecto social. Por ese motivo es que expresamos nuestro apoyo total a las palabras del presidente García”. Y concluyó: “Es algo muy sensato y algo que todos no solo deberíamos apoyar, sino también manifestarnos y hacerlo a través de los respectivos gobiernos de la América Latina y del Caribe”.

Pacifismo regional, racionalidad económica y sensibilidad social

La propuesta de Alan García puede tomarse como un lógico llamado a la racionalidad en el uso de los recursos de los contribuyentes y una sincera preocupación por los sectores más pobres. Pero al mismo tiempo puede ser un mensaje dirigido, por un lado, al presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, y por otro lado, a los políticos chilenos.

Es que así como el Perú, con distintos gobiernos democráticos, viene creciendo económicamente y disminuyendo sus índices de pobreza, la Venezuela de Chávez es el ejemplo de todo lo contrario. Desde que Chávez llegó al poder, elegido democráticamente, ha ido erosionado el estado de derecho hasta convertir su sistema político en un evidente régimen autoritario y, con un alto grado de intervencionismo económico que incluye expropiaciones, aumentó los índices de pobreza en un marco de creciente inseguridad pública.

Por eso, teniendo en cuenta que Perú y Venezuela

representan diferentes modelos políticos, económicos e institucionales, junto con el hecho de que Chávez ha apoyado abiertamente al candidato ultranacionalista peruano que enfrentó a Alan García en el ballottage, es comprensible que el líder aprista, que en esas últimas elecciones se consagró por segunda vez como presidente del Perú, sea uno de los pocos referentes democráticos regionales decidido a enfrentar a un populista de origen militar.

Pero por otro lado, el discurso anti-armamentista de García puede al mismo tiempo estar destinado al consumo interno, debido al incremento permanente del gasto militar en Chile y al hecho de que ambos países mantuvieron una guerra a fines del siglo XIX –en la cual Perú fue derrotado- y aún hoy existe una disputa por un límite marítimo que está pendiente de resolución en La Haya.

Sin embargo, la ruptura de relaciones de Venezuela con Colombia que se produjo este año, debido a la denuncia del entonces presidente Álvaro Uribe sobre la presencia de las FARC en territorio bolivariano, pone en evidencia que la principal amenaza a la paz y, por cierto, a la desestabilización democrática en la región es, precisamente, el comandante-presidente Hugo Chávez Frías.

Al respecto, es importante resaltar lo que señalaba el 9 de septiembre del 2009 el analista Román Ortiz en el sitio de Infolatam: “la cuestión clave no es cuánto gasta un país en defensa o qué equipo militar posee sino quién tiene las armas y para qué las quiere. En otras palabras, sin perder de vista las capacidades bélicas de un gobierno, el factor determinante para considerarlo una amenaza tiene que ver con sus intenciones políticas y estratégicas. En este sentido, es muy distinto un submarino o un cazabombardero en manos de países perfectamente democráticos como Chile o Brasil que al servicio de un proyecto ideológico expansionista como el impulsado por Venezuela. Para comprobarlo, basta con comparar la moderación de los discursos de mandatarios como la chilena Bachelet o el brasileño Lula con la facilidad con que el presidente Chávez recurre a la retórica belicista. Una diferencia que debería ser tomada en cuenta por países como Rusia, China o España antes de decidir a quien venden armas en América Latina”.

De todas formas, más allá del uso que se puede hacer de la política exterior para que un presidente intente fortalecerse internamente, el debate que propone Alan García lo debe trascender y llamar a la reflexión, especialmente a aquellos líderes democráticos supuestamente embanderados en las causas progresistas. Es que la verdadera preocupación por los más pobres y la tan declamada redistribución del ingreso, debe darse en los debates presupuestarios estableciendo las

prioridades del gasto en base a los recursos con los cuales cuenta un estado. Por ende, el debate sobre el gasto militar debe alcanzar a más países, inclusive a aquellos que no tienen grandes recursos para tal fin.

Argentina: entre la existencia simbólica de las Fuerzas Armadas y la necesidad de priorizar la seguridad interna

En la Argentina habría que empezar a debatir si es necesario seguir manteniendo unas simbólicas Fuerzas Armadas o si en su lugar deberían invertirse esos recursos, humanos y económicos, reasignándolos en atender la creciente inseguridad interna.

Al respecto, “la política presupuestaria institucional del Ministerio de Defensa de la República Argentina para el año 2010 preveía, en relación al cumplimiento de las actividades sustantivas: Sostener un sistema de defensa nacional a través de un instrumento militar apto, que garantice ante la agresión externa de otro estado la integridad del territorio nacional y la seguridad de sus habitantes”. Si esta es la justificación para mantener las Fuerzas Armadas en la Argentina, entonces hay que pensar seriamente en la necesidad de seguir manteniéndolas tal como están ahora.

Está claro que las Fuerzas Armadas de la Argentina no volverán a ser las de antes, que es cierto que no existen hipótesis reales de conflicto y, especialmente, que la ciudadanía no puede mantener una estructura virtualmente inútil cuando existen otras prioridades a las cuales podrían destinarse los 10.118.057.875 de pesos que consume el Ministerio de Defensa, de acuerdo al presupuesto 2010.

Hay que tener en cuenta que para la seguridad interior, lo que más les preocupa a los habitantes de la Argentina, se destinan a nivel nacional 11.186.586.156 pesos, incluyendo en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos al Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que en total representa a 105.042 empleados.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de la Argentina lo componen: el Estado Mayor General del Ejército, Estado Mayor General de la Armada, el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, reuniendo a un total de 101.833 efectivos.

Para tener una idea del estado simbólico en que se encuentran las FFAA de la Argentina, en una nota firmada por Pedro Ylarri, publicada el 25 de julio de 2010 en el diario Perfil, se destacaba que la Argentina no aguantaría una guerra de más de dos horas: “El gasto en Defensa con relación al PBI es uno de los más bajos

del mundo y el más reducido de la historia argentina: apenas 0,9 por ciento de la economía, lo que se evidencia en deterioro del equipamiento militar, sueldos bajos y en negro, desertión de pilotos hacia la aviación privada y, en definitiva, la realidad de un país sin capacidad de reacción frente una eventual agresión militar. Además, faltan radares”.

Ylarri agrega que “La situación es tan precaria que, cuando el Gobierno quiso organizar un desfile para el Bicentenario, desde la cúpula militar advirtieron que ellos temían que los tanques se detuvieran en medio de la 9 de Julio. El bajo presupuesto de las Fuerzas Armadas, según legisladores y expertos, están trayendo cada vez más problemas al sistema de defensa, como bajo poder de fuego, equipamiento obsoleto, pérdida de efectivos y tropas poco tecnificadas”.

Respecto a la actual política de defensa, Perfil menciona que para el gobierno “la situación no es preocupante porque la Argentina no tiene hipótesis de conflicto”, agregando la posibilidad de la virtual eliminación de los liceos militares.

En consecuencia, no se trata entonces de eliminar totalmente las Fuerzas Armadas, sino de contemplar la reasignación de su personal para atender la principal amenaza de agresión a los habitantes de la Argentina.

Por ejemplo, el personal del Ejército podría optar por pasar a desempeñarse en la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional o las policías provinciales; y los recursos humanos de la Armada reasignarlos a la Prefectura Naval Argentina. En todos los casos, podrían acogerse a un retiro voluntario que se financie con parte de la venta de los terrenos que ocupa el Ejército. Quedaría solamente en pie, de las fuerzas componen a las tres FFAA de la Argentina, la Fuerza Aérea, la única cuya función puede justificarse en la actualidad y en la cual es necesario invertir mayores recursos, tanto para mantener y renovar su equipamiento, como para garantizar una efectiva radarización del espacio aéreo nacional.

Asimismo, el ahorro en equipamiento en el Ejército y la Marina tendría que reasignarse en la profesionalización y mejores salarios de las fuerzas de seguridad dedicadas a combatir la amenaza a la vida y propiedad de los habitantes de la Argentina.

En definitiva, más allá de la utilidad revanchista que puede tener una propuesta así bajo un gobierno que reivindica los ideales antidemocráticos de la guerrilla setentista, se trata en definitiva de una iniciativa de claro corte liberal progresista.

Uruguay: La Carta de Óscar Arias a Mujica

Si bien en la Argentina no se ha planteado hasta ahora la necesidad de seguir contando con las Fuerzas Armadas tal cual fueron concebidas, en el vecino Uruguay el

debate lo generó una propuesta de Oscar Arias, entonces presidente de Costa Rica, en una carta que le envió a su par José “Pepe” Mujica.

Así como el planteo del peruano Alan García, de reducir el gasto militar para atender cuestiones sociales es puro sentido común, lo mismo puede decirse de los argumentos ofrecidos por el Premio Nóbel de la Paz Oscar Arias al flamante presidente oriental: “No le escribo hoy a don José Alberto Mujica Cordano, sino al ‘Pepe’ revolucionario, a ese hombre que en medio del fango del horror, conservó siempre intacta la flor de la justicia; a ese soñador que no apagó la luz de la utopía, ni en el más oscuro rincón de su celda olvidada; a ese idealista que defendió, ante ofensas y amenazas, una fe inquebrantable en un futuro mejor para Uruguay y para América Latina. Le escribo al ‘Pepe’ para decirle que queda todavía, en el morral del tiempo, una última utopía: la abolición del ejército uruguayo”.

Para sorpresa, la civilizada y respetable dirigencia política uruguaya reaccionó ofendida por la iniciativa de Arias, tanto desde el oficialista Frente Amplio como por parte de los tradicionales partidos Blanco y Colorado. “No me extrañaría que Óscar Arias le esté haciendo los mandados a alguien. Es un atrevimiento, una injerencia en los asuntos internos”, opinó el senador oficialista Eleuterio Fernández Huidobro, perteneciente al mismo grupo político del presidente Mujica. “Es inadmisibile, una falta de respeto el planteo de eliminar las FF.AA. No salgo de mi asombro que se le diga a un país cómo debe organizarse institucionalmente”, dijo Luis Alberto Lacalle, ex presidente y actual senador del Partido Nacional.

Pero en su respetuosa carta a Mujica, Arias aclaraba lo siguiente: “Sé que no tengo ningún mandato sobre los destinos de su pueblo. No pretendo irrespetar la soberanía de una nación hermana. Tan sólo quiero brindar un consejo que veo escrito en el muro de la historia de la humanidad: los ejércitos son enemigos del desarrollo, enemigos de la paz, enemigos de la libertad y enemigos de la alegría”.

Arias también recordó que “Los ejércitos latinoamericanos han significado un gasto prohibitivo para nuestras economías. Y en el peor, han significado una trampa permanente para nuestras democracias”. Por eso, le planteó a Mujica que: “Uruguay no necesita un ejército. Su seguridad interna puede estar a cargo del cuerpo de policía, y su seguridad nacional no gana nada con un aparato militar que jamás será más poderoso que el de sus vecinos, que además son países democráticos. No importa cuánto invierta en sus fuerzas armadas, Uruguay no logrará ganar una carrera armamentista contra Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Venezuela. En las circunstancias actuales, la indefensión es mejor

política de seguridad nacional para su pueblo, que un aparato militar inferior al de sus vecinos”.

¿Acaso no es puro sentido común lo que plantea Arias? Y ciertamente, tiene a su propio país como para ponerlo de ejemplo: “Lo digo por experiencia. Costa Rica fue el primer país en la historia en abolir su ejército y declararle la paz al mundo. Hace más de sesenta años, otro Pepe revolucionario, el Comandante José Figueres, decidió proscribir para siempre las fuerzas armadas de mi país. Desde entonces, los costarricenses no han vuelto a vivir una guerra. No han vuelto a derramar su sangre en un enfrentamiento civil. No han vuelto a temer un golpe de Estado, una dictadura o un régimen de persecución política. Mi pueblo vive en paz porque apostó a la vida; vive en paz porque confió en el poder de la razón para gobernar los impulsos de la violencia”.

Arias también le recordó a Mujica que “Hubo una época en que mi pueblo colindaba al norte y al sur con la dictadura. Hubo una época en que el silbido de la metralla sonaba muy cerca de nuestras fronteras. En lugar de tomar las armas, Costa Rica salió a luchar por la paz en Centroamérica. No nos hizo falta el ejército. Por el contrario, estar desmilitarizados nos permitió ser percibidos como aliados de todas las partes del conflicto. En verdad le digo que no ha habido decisión que más haya fortalecido la seguridad nacional costarricense, que la de eliminar el ejército”.

Es cierto que una propuesta de afuera puede generar celos y demostrar la falta de ideas propias. De hecho, es muy evidente que Uruguay requiere una reforma del estado, pues un amplio porcentaje de su sector público es una suerte de seguro de desempleo encubierto. Además, de acuerdo a los datos brindados por el diario El País, el Ministerio de Defensa del Uruguay tiene 31.195 funcionarios en su plantilla. Solo en el Ejército hay 16.811 empleados, en la Armada 5.969 y en la Fuerza Aérea 3.063. En un país con creciente inseguridad interna, aunque irrelevante comparada con la Argentina y otros países de la región, ese personal de Ejército sería mucho más efectivo reasignándolo para, previo entrenamiento y capacitación, trabajar en la prevención del delito callejero.

En definitiva, es bueno que en la región en general se debata el gasto militar y la importancia de reducirlo para atender cuestiones mucho más prioritarias, y que en algunos países como el Uruguay el tema invite a discutir una necesaria reforma del estado.

Un homenaje a Juan Bautista Alberdi en el Bicentenario de su natalicio

Para concluir, vale la pena recordar que este año del Bicentenario de la independencia de Venezuela, Argentina, Chile, Colombia y México, coincide con los

doscientos años del natalicio de Juan Bautista Alberdi, un precursor del pacifismo en el derecho público internacional.

En efecto, el padre de la Constitución Nacional de la República Argentina, sancionada en el año 1853, es muy conocido por escritos como las “Bases” y “Sistema Económico y Rentístico”, pero mucho menos por su original obra de 1870 “El crimen de la guerra”.

En dicho texto, publicado hace 140 años, Alberdi señalaba: “Si la revolución de Sud América ha tenido por objeto la libertad, es decir, el gobierno del país por el país, y no por el ejército, nada puede perjudicar más al objeto de la revolución, que la gloria militar, privilegio del ejército y del poder de la espada en que el pueblo no tiene parte alguna”.

Para Alberdi, “La guerra es la muerte de la agricultura y del comercio y su resultado en Sud América es el empobrecimiento y la miseria de sus pueblos; es decir, fuente de miseria, de pobreza y debilidad. La guerra aumenta la deuda pública, y sus intereses crecientes

obligan al país a pagar contribuciones enormes que no dejan nacer la riqueza y el progreso del país. La guerra engendra la dictadura y el gobierno militar creando un estado de cosas anormal y excepcional incompatible con toda clase de libertad política. La ley marcial convertida en ley permanente es el entierro de toda libertad. La guerra absorbe el presupuesto de gastos, deja a la educación y a la industria sin cuidados, los trabajos y empresas desamparados, y todo el tesoro público convertido en beneficio permanente de una aristocracia especial”.

Y mucho antes de la aparición de la Fuerza Aérea, Alberdi ya advertía sobre el lobbying que está detrás del gasto militar: “La guerra es un estado, un oficio, una profesión, que hace vivir a millones de hombres. Los militares forman su menor parte. La más numerosa y activa, la forman los industriales que fabrican las armas y máquinas de guerra, de mar y tierra, las municiones, los pertrechos; los que cultivan y enseñan la guerra como ciencia. Abolir la guerra, es tocar al pan de todo ese mundo”.

Acerca de CADAL

El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), con sede central en Buenos Aires, Argentina, y una representación en Montevideo, Uruguay, es una fundación privada, sin fines de lucro y apolítica. CADAL integra el Network of Democracy Research Institutes (NDRI), es un Instituto Asociado al Proyecto Plataforma Democrática, es miembro fundador de la Red Puente Democrático Latinoamericano y está registrada como Organización de la Sociedad Civil ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Misión

La misión de CADAL consiste en promover: el fortalecimiento de la democracia y la vigencia del estado de derecho; la implementación de políticas públicas que favorezcan al progreso económico, social e institucional; la integración regional y su apertura al comercio mundial; y la promoción internacional de los derechos humanos.

FOROS



DOCUMENTOS



CAPACITACIÓN A UNIVERSARIOS



INFORMES



Reconquista 1056, piso 11º
1003 Buenos Aires • República Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4313-6509 / 4312-7743
E-Mail: centro@cadal.org • www.cadal.org